

# En búsqueda de salidas pacíficas y duraderas

Resulta decepcionante que pese a la gravedad de la asonada sangrienta ocurrida el pasado viernes en la región amazónica, así como a la crisis política que se ha desatado de manera consiguiente, la jornada de ayer haya sido totalmente nula en la búsqueda de soluciones integrales.

El Gobierno ha reconocido que falló la comunicación para entenderse con los auténticos dirigentes de las comunidades nativas. Y el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha insistido en que sí había un plan para desalojar a quienes habían cerrado las carreteras en la zona de Bagua, aunque contradictoriamente asegura que "se siente culpable de la muerte de los policías (porque les dijeron que no llevaran armamento)". ¿Significa eso que el plan no estaba afinado?

**Debe retormarse el diálogo porque ese es el camino al restablecimiento de la paz, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven**

La ministra del Interior, si bien asume la responsabilidad política por los luctuosos acontecimientos, persiste en la versión—a todas luces inexacta—de que no existieron informes de inteligencia previos, lo cual resulta también contradictorio, porque, como ella reconoce, la policía tuvo a cargo la ejecución de la operación fallida, ya que "tiene su propia jerarquía". Quizá eso explique por qué la señora Cabanillas no conocía los reportes previos.

En cuanto a su ataque contra **El Comercio**, deslizado que estaría al servicio de ciertos intereses políticos, ella sabe muy bien que nos rigen la independencia y la veracidad, así como la plena identificación con los intereses del Perú, que no es lo mismo que identificarse con los funcionarios de un gobierno de

turno ni con partido político alguno.

En el Congreso, la sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa ha sido pobre, pues fue una suerte de necio ajuste de cuentas. Los humalistas estuvieron en el cínico papel de víctimas, cuando las evidencias los sindicaron como azuzadores del conflicto e incluso cómplices en la fuga a la Embajada de Nicaragua del cabecilla Alberto Pizango, quien traicionó a sus hermanos nativos. Los fujimoristas trataron de sacar provecho de la situación; y los apristas únicamente intentaron eximirse de culpas. Nadie, en cambio, asume hasta hoy la responsabilidad integral por lo ocurrido.

Entre tanto, el movimiento de defensa de los indígenas amazónicos está dividido. Mientras los seguidores de Pizango continúan el bloqueo de carreteras en Yurimaguas, "exigiendo" ahora la renuncia del presidente de la República, el cambio de la política económica, la denuncia del TLC, etc., las voces más prudentes buscan la conciliación con el Gobierno.

Tal es el caso de los apus de la región San Martín, quienes han presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones cien mil firmas, que deberán ser validadas para iniciar el camino hacia la acción de inconstitucionalidad de los decretos conflictivos. Precisamente, esta es la ruta a transitar. Es hora de que el Tribunal Constitucional conozca el caso y emita una sentencia para que el Estado pueda reconsiderar, sin abjurar de las potestades del Legislativo y el Ejecutivo, las normas que tanto problema acarrearán.

Asimismo, debe retomarse el diálogo porque ese es el único camino al restablecimiento de la paz social, aunque ese diálogo solo será posible cuando el Gabinete Ministerial y cuando la dirigencia nativa se renueven oficialmente.

El presidente García—además de dirigirse a una nación que espera un informe preciso del jefe del Estado—debe empeñar su liderazgo entendiendo que en el sistema democrático los ministros son una suerte de fusibles para que el sistema representativo

no se afecte de manera medular.

Desde el punto de vista comunicativo, el Gobierno debe, asimismo, organizar un sistema de reporte transparente y preciso sobre los hechos. No puede ser posible, por ejemplo, que hasta el momento no se establezca el número definitivo de los muertos y heridos en la zona de Bagua, cosa que fomenta manipulaciones sobre presuntas fosas clandestinas.

Falta, entre tanto, que se restablezca el pleno imperio de la autoridad democrática en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas y no se restauren las garantías para los ciudadanos y las empresas, la emergencia no se superará.

La denuncia sobre una presunta conspiración contra el Perú debe, luego, precisarse. Es cierto que existen indicios de

**Falta que se restablezca el pleno imperio de la autoridad en todos los pueblos afectados por la violencia. Mientras se mantengan las amenazas de nuevas asonadas, la emergencia no se superará**

injerencias extremistas y hasta eventualmente extranjeras; sin embargo, no coinciden las palabras del mandatario con las de su primer ministro; tampoco con el texto utilizado en un spot publicitario oficial.

La acción diplomática, por lo demás, ha sido eficiente al pedir a la Asamblea de la OEA una reunión extraordinaria para informar sobre lo sucedido y evitar la manipulación que habían iniciado los delegados de otros países de la región.

Por último, el país—especialmente a través de los medios de comunicación—debe recuperar no solo la calma, sino también la confianza en que por muy aciagos que sean los episodios de confrontación social en una democracia, siempre será posible encontrar salidas creativas, duraderas y pacíficas. ■

## CÓMO SALIR DE LA CRISIS POLÍTICA TRAS LOS SUCESOS DE BAGUA

### La autocrítica es urgente

Henry Pease García

Ex presidente del Congreso



Conforme pasaban los días previos a la tragedia varios observadores callábamos y sentíamos que algo terrible iba a suceder. Ya sucedió y todos son "nuestros muertos", las voces racistas y excluyentes solo llevan a "senderizar" la vida política. Pero hay que comenzar por el principio.

La ley solo tiene legitimidad cuando se construye en público, debatiéndola antes de ser ley. Los decretos legislativos evaden ese debate. Nos enteramos de ellos cuando ya son ley. Polarizan las opciones, envenenan la reacción ciudadana y favorecen a quien quiere polarizar, porque así gana algo políticamente. Por no debatir ni escuchar al otro llega a crear un mito polarizador. La delegación de facultades puede ser útil en leyes técnicamente complejas que afectan lo administrativo, no cuando se trata de derechos o expectativas ciudadanas.

Ese es el primer error del gobierno y corresponde con la legu-

leada como estilo o manera de hacer política. Esa trágica manía que en el caso de Panamericana Televisión terminó en tragico-media porque, como bien dijo Juan Paredes Castro el último domingo, había que distinguir entre la empresa y sus derechos, y los derechos de todos los peruanos, a que un bien público, como es la señal de televisión, no quede en manos de un delincuente o de quien, aun deslindando con este, recurre a argucias judiciales inaceptables.

**“Todos los gobernantes se deben a los electores, los escuchan y no los excluyen”**

Pero aquí viene el error mayor, y el presidente de la República—cargó que debería implicar la prudencia de no escribir—perpetró los conocidos artículos sobre el perro del hortelano. Los más pobres entre los pobres eran los agredidos en estos artículos

y si, como dicen ahora, estaban desinformados, esta fue la manera de condenarlos por estarlo y por plantear sus necesidades no ante un proyecto de ley que se debatirá sino ante un hecho consumado.

Estos dos errores contradicen algo esencial de toda democracia representativa: los gobernantes se deben a los electores, los escuchan y no los excluyen. No hay democracia representativa en que pueda decirse, como en días pasados, que esos indígenas—para algunos solo 400.000—no deben entorpecer a los millones de peruanos que necesitan esos recursos naturales.

Agreguemos que en más de 50 días el gobierno fue incapaz de dialogar y el Parlamento, contradiciendo su esencia, hizo una jugareta para no derogar el decreto más cantado. Eso hubiera calado más ánimo que se radicalizan cuando se evidencia el desprecio que los poderosos tienen ante los que reclaman.

El peor error viene tras todo esto, hoy la lógica del discurso oficial es denunciar una conspiración contra la democracia, aunque su comportamiento ha sido antidemocrático, es mucho más que dejar que fiscales y jueces enjuicien a quienes violaron la ley. Es su manera de no ver el bosque y quedarse mirando los árboles. Si no hay autocrítica, habrá muchos muertos más y la política peruana tendrá un componente senderista que todo lo radicaliza y todo lo envilece.

Abrumado, he visto en televisión los cuerpos de policías y nativos. La ferocidad es indescriptible y no se resuelve con más exclusiones. Se resolverá solo aplicando la democracia política desde su raíz, esa que escucha al otro, no lo estigmatiza, lo ama, no lo odia. Solo el amor, que es el fundamento de la justicia y de la ley, puede cambiar las cosas. ■

### La salud del país

Ernesto Velit Granda

Analista político



Los sucesos de Bagua han servido para mostrar muchas cosas, entre ellas, creemos, las debilidades tanto del sistema político como de la gobernabilidad del país.

Las instituciones comprometidas en lo sucedido—las mismas que debieron resolver el problema cuando se podía deducir, fácilmente, hasta dónde podía llegar si no se atendía de inmediato—demostraron su ineficiencia, su poco interés por escuchar las voces de peruanos históricamente marginados, su soberbia al creer en una infraestructura gubernamental que hace agua por muchas partes, su confianza en capacidades políticas y técnicas discutibles, y hasta el poco valor concedido a la vida humana.

Queremos reflexionar sobre un acontecimiento que ha llenado de luto y de dolor a muchos hogares peruanos. Y es solo el ánimo de proteger un sistema que tanto esfuerzo costó salvar de las manos de la corrupción y del crimen por lo que levantamos nuestra voz de protesta y de indignación, y al mismo tiempo de temor por la gravedad de lo sucedido, que nos muestra indefensos ante la irresponsabilidad del poder.

No es difícil establecer responsabilidades. Es la institucionalidad democrática y el Estado de derechos los que parecieran ha-

ber colapsado al no saber manejar una situación que escapó de manos incompetentes y, sobre todo, de personas insensibles.

Una dirigencia nativa en manos fundamentalistas y sectarias ha llevado por caminos equivocados a una masa de pobladores olvidados del Estado y convencidos de que tienen poco que perder, pero que de pronto pueden lograr mejorar su situación de olvido y postergación secular.

El Poder Ejecutivo, teóricamente depositario de la confianza nacional, no estuvo a la altura de las circunstancias. El primer ministro, de cuya honestidad pero también de su inexperiencia política no tenemos dudas, mostró que el problema sobrepasaba sus capacidades. El Poder Legislativo reafirmó lo que hace tiempo el pueblo sabe de él: es un refugio de la incompetencia y de las prácticas políticas que solo llevan a abaratar su papel en el esquema democrático, con debates que solo sirven para mostrar mediocridad y poco conocimiento de la realidad nacional.

Allí están los muertos, como siempre procedentes de los sectores pobres de la población. Policías a los que se llevó al sacrificio, sin estrategia ni dirección racional, y pobladores nativos envenenados por una dirigencia que creyó presentada la ocasión de construirse un futuro político.

El Gobierno tiene que dar pasos inmediatos porque la convulsión continúa, amenaza extenderse y ahora es alimentada por el deseo de venganza.

El Gabinete debe ser reestructurado en bien de la paz nacional. No es signo de debilidad sino de prudencia política cambiar a los ministros cuyos sectores forman parte de la tragedia. Los cambios mostrarán la voluntad de reparar los daños y de decirles a los pobladores amazónicos que hay voluntad de oírlos y comprenderlos. Son decisiones que reclama la salud de la República.

Los decretos que engendraron la protesta deben ser dejados en suspenso y vueltos a replantear con la participación de los grupos amazónicos que opten por el diálogo y que son muchos.

Es necesario una versión oficial sobre la tragedia que dé fin a la anarquía de la información, particularmente sobre los muertos y desaparecidos. Que se establezca la participación de los detenidos para evitar abusos. La defensoría está obligada a hacer conocer al país su versión de los acontecimientos, su palabra siempre respetada en el país es hoy más reclamada que nunca.

No dudamos del papel nocivo de algunos dirigentes nativos, cuya responsabilidad recibirá el juicio de su propio pueblo. Tampoco del rol que le cabe al Poder Judicial, en lo que es un desafío ante la opinión del país. Pero de lo que estamos muy seguros es de la necesidad de que quienes ostentan el poder hagan un balance de sus capacidades, de la eficiencia de los que participan en la conducción de la patria, y, sobre todo, asuman la autocrítica que la nación reclama y que nos convencerá de si debemos o no seguir confiando en ellos.

Mejor es saberlo a tiempo para saber a qué atenerse. ■



ILUSTRACIÓN VÍCTOR AGUILAR

MÁS COLUMNISTAS

Léalos en nuestra web:

www.elcomercio.com.pe

Pedro Morales Corrales

Abogado laboralista



Consagración internacional

El fin de la cédula viva

Humberto Rebagliati M.

Periodista

El factor boliviano en la encrucijada

Las insolencias y la actitud hostil de Evo Morales hacia el Gobierno Peruano y el presidente García no cesan ni cesarán

## HUMOR PROFANO

Por Molina

